



Proceso	Verbal
Demandante	Gabriela Pino Salazar y otros
Demandados	Guillermo Jiménez Ocampo y otros
Radicado	No. 05001-31-03-002-2015-01174-02
Procedencia	Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín
Instancia	Segunda
Ponente	Luís Enrique Gil Marín
Asunto	Sentencia No. 004
Decisión	Confirma
Tema	Responsabilidad civil extracontractual
Subtemas	Concurrencia de culpas. Ausencia de guarda material y jurídica del automotor causante del accidente. Sanción por el juramento estimatorio. Sustentación del recurso de apelación. Se puede sustentar en primera instancia. Jurisprudencia.

**TRIBUNAL SUPERIOR**

**SALA SEGUNDA DE DECISION CIVIL**

Medellín (Ant.), diecisiete de febrero de dos mil veintidós

**I. OBJETO**

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la codemandada María Nelly Ramírez Ossa, en contra de la sentencia proferida por el **JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN**, en este proceso verbal instaurado por la señora **GABRIELA PINO SALAZAR** en nombre propio y en representación de **MIGUEL ÁNGEL**

**RESTREPO PINO, MARISABEL TOBÓN PINO y WILMAR ANDRÉS PINO SALAZAR,** en contra de los señores **GUILLERMO DE JESÚS JIMÉNEZ OCAMPO y MARÍA NELLY RAMÍREZ OSSA.**

## **II. ANTECEDENTES**

***Pretensiones:*** Solicitan los demandantes se declare a los demandados Guillermo de Jesús Jiménez Ocampo, conductor y María Nelly Ramírez Ossa, propietaria, civil, extracontractual y solidariamente responsables de los perjuicios materiales e inmateriales causados a los demandantes, con ocasión del accidente de tránsito al que se contraen los hechos de la demanda; se les condene a pagar los daños y perjuicios que estiman razonadamente en \$341.690.179.00, discriminados así: i) lucro cesante pasado para cada uno de los actores Gabriela Pino Salazar y Miguel Ángel Restrepo Pino, \$97.262.156.00; ii) lucro cesante futuro \$41.826.668.00 para Gabriela Pino Salazar y \$40.904.199.00 para Miguel Ángel Restrepo Pino y, iii) daño moral 100 SMLMV para cada uno de los demandantes, que para el año 2015 equivalían a \$64.435.000.00. Por último, solicitan se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada.

***Elementos fácticos:*** Como soporte de estos pedimentos en esencia afirman: El 08 de septiembre de 2015, en la carrera 70 con calle 10, de la ciudad de Medellín, a las 10:20 p.m., cuando la señora Sor María Pino Salazar se desplazaba como peatona por la acera, fue atropellada por el vehículo de placas EVR-904, conducido por el señor Guillermo de Jesús Jiménez Ocampo, propiedad de la señora María Nelly Ramírez Ossa,

causándole de inmediato la muerte; el conductor huyó del lugar de los hechos sin auxiliar ni socorrer a la víctima; el rodante fue localizado minutos después, con el parabrisas delantero roto y con rastros del accidente; por la comunidad y llamadas a la central de la Policía Nacional, fueron ubicados el conductor y la propietaria del automotor en el Conjunto Residencial Unidad Salamanca de La Mota, Diagonal 75C No. 2A-146, apartamento 405; a causa del fatídico accidente, intervino la Secretaría de Tránsito y Movilidad de la ciudad, según consta en el expediente No. A 000254180-0 y ante el Juzgado 13 Penal Municipal de Medellín, con SPOA 050016000 206 2025 44988 00, número interno 152763, seguido por la Fiscalía 106 Seccional de la Unidad de Vida, se llevó a cabo la audiencia concentrada; la prueba de alcoholemia realizada al conductor del rodante dio como resultado un tercer grado (173 miligramos de sangre); para la fecha del accidente, la víctima contaba con 26 años y 4 meses de edad, vivía con su madre Gabriela Pino Salazar y los hermanos Marisabel Tobón Pino y Wilmar Andrés Pino Salazar, así como con su hijo menor Miguel Ángel Restrepo Pino; tanto la señora madre como el hijo menor de la víctima, dependían económicamente de ésta, con quien además vivían, se apoyaban y compartían, los unían lazos de consanguinidad, afectivos, sentimentales y de fraternidad, como ocurre entre buenos padres, hermanos e hijos; para la época del accidente la occisa se encontraba desempleada estaba en busca de trabajo, teniendo bajo su responsabilidad a su hijo menor, dado que el padre de éste también falleció, quedando huérfano de padre y madre, pero bajo la custodia y guarda de la abuela paterna Flor Marina Mesa García; como los demandantes en la actualidad están en difícil situación

económica, ya que no devengan ninguna pensión o salario, ni poseen bienes en su patrimonio, solicitan se les conceda el amparo de pobreza.

***Admisión de la demanda y réplica:*** Notificados del auto admisorio de la demanda, la codemandada María Nelly Ramírez Ossa, la replicó, se opuso a las pretensiones y como medios de defensa propuso los siguientes: ***i) ausencia de guarda material y jurídica del bien con el cual se ocasionó los perjuicios; ii) culpa exclusiva de la víctima; iii) concurrencia de culpas; iv) prescripción; v) cuantificación excesiva de los perjuicios extrapatrimoniales y, vi) compensación – deducción de los montos reconocidos.***

***Objeción al juramento estimatorio:*** porque la cuantificación de los perjuicios materiales se fundamenta en el supuesto de que la occisa percibía un salario mínimo legal mensual y que los demandantes dependían económicamente de ésta; sin aportar prueba en tal sentido.

***Denuncia del pleito:*** La codemandada María Nelly Ramírez Ossa, presentó denuncia del pleito contra el señor Carlos Hernán García, para que resuelva sobre los perjuicios causados a la denunciante porque no había realizado en tiempo oportuno, el traspaso del rodante de placas EVR 904.

Como soporte para la denuncia del pleito, informa que el vehículo de placas EVR 904 fue enajenado el 14 de mayo de 2014, por la denunciante al señor Carlos Hernán García Morales, fecha desde la cual lo entregó real y materialmente

al comprador, desprendiéndose de su guarda material y jurídica; el 16 de junio de 2015, la vendedora entregó al comprador el formulario de solicitud de trámite del registro nacional de automotores No. 647427 para que como legítimo propietario lo registrara ante el organismo de tránsito, procediendo a ello el 07 de diciembre de 2015, lo que significa que cuando el rodante estaba bajo la guarda material y jurídica del señor García Morales, se produjo el accidente de tránsito objeto de la demanda.

Admitida la denuncia del pleito (folio 19 cuaderno 4), y notificado en forma personal al denunciado (folio 22 cuaderno 4), éste no realizó pronunciamiento alguno.

Por auto del 21 de febrero de 2017 (folio 310 cuaderno principal), se aceptó la reforma a la demanda en cuanto se excluyó como demandante al menor Miguel Ángel Restrepo Pino, hijo de la víctima Sor María Pino Salazar.

**Sentencia:** Se profirió el treinta (30) de julio de 2018, con la siguiente resolución:

**"PRIMERO:** SE DECLARAN no probadas las excepciones de mérito denominadas CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA y CONCURRENCIA DE CULPAS.

**"SEGUNDO:** SE DECLARAN CIVIL Y EXTRACONTRACTUALMENTE RESPONSABLES a los señores GUILLERMO DE JESÚS JIMÉNEZ OCAMPO y MARÍA NELLY RAMÍREZ OSSA de condiciones civiles y personales conocidas, el primero como conductor y la segunda como propietaria

*inscrita del vehículo de placas EVR 904; por los daños causados a los demandantes GABRIELA PINO SALAZAR, MARISABEL TOBÓN PINO y WILMAR ANDRÉS PINO SALAZAR, con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el día 8 de septiembre de 2015, en el cual falleció su hija y hermana SOR MARÍA PINO SALAZAR.*

**"TERCERO:** *En consecuencia, SE CONDENA a los demandados GUILLERMO DE JESÚS JIMÉNEZ OCAMPO y MARÍA NELLY RAMÍREZ OSSA al pago de los PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES a favor de los demandantes GABRIELA PINO SALAZAR, MARISABEL TOBÓN PINO y WILMAR ANDRÉS PINO SALAZAR.*

*"En las siguientes sumas de dinero:*

*"A favor de GABRIELA PINO SALAZAR como madre de la difunta SOR MARÍA PINO SALAZAR el valor equivalente a **70 SMLMV** al momento de ocurrencia de los hechos, es decir, año 2015.*

*"MARISABEL TOBÓN PINO y WILMAR ANDRÉS PINO SALAZAR como hermanos de la fallecida SOR MARÍA PINO SALAZAR el valor equivalente a **40 SMLMV** para c/u vigentes también al momento de ocurrencia de los hechos, es decir, para el año 2015.*

*"Sumas de dinero que deben cancelarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia so pena que sobre las mismas se reconozca un interés del 0.5% mensual hasta que se cancele la totalidad.*

**"CUARTO:** *No se impone sanción al juramento estimatorio por el beneficio de amparo de pobreza que cobija a los demandantes.*

**"QUINTO:** *SE CONDENA en costas a la parte demandada.*

**"SEXTO:** *SE FIJA como agencias en derecho a favor de la parte demandante el valor de \$7.500.000,00 a los cuales ya se les hizo la reducción del 30% de las costas".*

La sentencia empieza planteando como problemas jurídicos a resolver: ¿están acreditados los elementos axiológicos para la prosperidad de la acción de responsabilidad civil extracontractual? ¿se debe condenar a los demandados al pago de los perjuicios reclamados por los demandantes? ¿se debe exonerar de responsabilidad a la codemandada María Nelly Ramírez Ossa, porque para la fecha de los hechos no era la poseedora material del vehículo causante del accidente? ¿se debe resolver sobre la denuncia del pleito presentada por la señora Ramírez Ossa contra el señor Carlos Hernán García Morales? ¿las excepciones propuestas por la señora María Nelly Ramírez Ossa, aniquilan las pretensiones de la demanda? ¿está llamada a prosperar la objeción al juramento estimatorio y se debe imponer a los demandantes las sanciones previstas en el Art. 206 del C.G.P., pese que están amparados por pobres?

Para desatar el primer problema jurídico planteado señala que, en tratándose del ejercicio de actividades peligrosas como lo es la conducción de vehículos, existe una presunción de culpa en favor de la víctima, estando solo obligada a

demostrar el hecho y el daño. El hecho como primer elemento, según lo narran los demandantes, tuvo lugar con el accidente de tránsito ocurrido el 08 de septiembre de 2015, cuando el automotor de placas EVR 904, conducido por el demandado Guillermo Jiménez Ocampo, atropelló a la joven Sor María Pino Salazar, cuando se encontraba en la acera, en la carrera 70 con calle 10 del sector del Aeroparque y, que por cuenta de las lesiones que padeció falleció de manera inmediata; como prueba se allegó la documental del accidente y del croquis, donde consta el lugar donde fue atropellada la víctima; en este trámite no se impuso responsabilidad contravencional al conductor del rodante por carencia de los elementos necesarios; sin embargo, fue sancionado por conducir en estado de embriaguez; también se aportó copia del proceso penal en contra del señor Guillermo Jiménez Ocampo, por el delito de homicidio culposo agravado, donde se llegó a un preacuerdo por el delito de homicidio culposo, eliminando los agravantes del punible, lo que redujo la pena al momento de la condena; igualmente, se trajo copia de la inspección técnica del cadáver así como el informe de necropsia donde se concluye que la causa de la muerte fue el accidente de tránsito, a lo que se suma el silencio y falta de actividad probatoria del extremo pasivo; especialmente, del señor Jiménez Ocampo. Así las cosas, está acreditada la ocurrencia del hecho; en cuanto al daño, es claro que el fallecimiento de la víctima causó un menoscabo a los demandantes quienes eran sus familiares más cercanos, madre y hermanos; pues como lo señalan en la declaración de parte, vivían bajo un mismo techo y se prestaban ayuda mutua por ser personas de bajos recursos; la víctima a pesar de no tener un trabajo fijo colaboraba con el pago del arriendo



y aunque desconocen los pormenores del accidente, es claro que los ha afectado porque aquella solo contaba con 26 años y tenía un hijo menor por quien respondía; la señora Gabriela con el deceso de su hija, también se ha visto afectada porque su nieto lo tiene la abuela paterna; no cabe duda, que la muerte de una persona en un accidente de tránsito como aquí se describe, afecta a los miembros más cercanos del núcleo familiar, no solo porque se trata de una persona joven con una larga expectativa de vida, sino además porque su ausencia en forma intempestiva afecta moralmente a todos; no siendo necesario otros medios de convicción para acreditar el dolor, angustia y sufrimiento de los demandantes. Colige que los presupuestos de la acción de responsabilidad civil extracontractual por el ejercicio de actividades peligrosas, están debidamente acreditados.

Dilucidado lo anterior, pasa al análisis de las excepciones denominadas culpa exclusiva de la víctima y concurrencia de culpas, porque de acuerdo al croquis la fallecida pudo estar en un lugar donde no había cruce peatonal y dada la poca visibilidad por la hora en que ocurrieron los hechos y la movilidad del sector, su actuar pudo ser o bien determinante o concurrente con el hecho que causó su muerte; estas afirmaciones no cuenta con ningún respaldo probatorio, si bien para la autoridad administrativa en el trámite contravencional no fue posible endilgar responsabilidad al conductor del vehículo, tampoco señaló la existencia de una conducta imprudente por cuenta de la víctima que diera lugar al accidente y menos aún para que se exonerara de responsabilidad al conductor; aunado a lo anterior, en la prueba documental de la acción penal, en la actuación

adelantada por la Fiscalía, señala una posible responsabilidad por parte del acusado; además, la parte demandada incumplió con la carga de la prueba que le incumbía y, por ende, dichos medios de defensa no están llamados a prosperar.

Pasando al siguiente problema jurídico; la existencia de una eximente de responsabilidad en cabeza de la demandada María Nelly Ramírez Ossa, mediante la excepción de ausencia de guarda material y jurídica del bien con el que se causaron los perjuicios, lo que de paso resuelve la denuncia del pleito en contra del señor Carlos Hernán García Morales, porque para el momento de los hechos no tenía la guarda material del automotor pese a estar inscrita en el historial como su propietaria, con soporte en las siguientes pruebas documentales: Contrato de compraventa suscrito por la demandada, como vendedora y el señor García Morales, como comprador, con fecha de elaboración 14 de mayo de 2014, donde indicó como condiciones de pago que se cancelaban \$4.500.000,00 de contado y el saldo restante en cuotas mensuales de \$1.000.000,00, desde el 14 de julio de 2014; formulario de solicitud de trámite del registro nacional automotor, donde solicita el registro del traspaso del vehículo, suscrito el 16 de junio de 2015, según lo señala el sello de la notaría; si bien, no se puede afirmar a ciencia cierta, que la fecha de autenticación es la misma en la que se remitió a la autoridad competente porque el recibo de pago de los impuestos para realizar el traspaso fue expedido en el año 2016, posterior al accidente; si puede ser cierto lo señalado por la parte actora en sus alegatos sobre la posible responsabilidad del funcionario de la notaría que permitió la

certificación de autenticación de la firma en dicho documento, ello no está probado para el Despacho; además, no permite señalar que para la fecha en que ocurrió el accidente la demandada tuviera la posesión material o la disposición sobre el automotor; lo que se sustenta con la prueba testimonial recibida en la audiencia, porque si bien los deponentes señalaron que no conocen de fondo el objeto del litigio, si indicaron que la demandada le vendió el vehículo a quien fue denunciado en pleito y lo hizo según el testigo Wilson Steven Beltrán, hace aproximadamente cuatro o cinco años atrás, aunque no sabe la fecha exacta, si saben que María Nelly cuando fue a solicitar el servicio de acarreo le comunicó que ella ya no era la dueña y lo remitió donde el señor Carlos García, quien como dueño podía hacerle el viaje que necesitaba y efectivamente testificó que, a partir de ese momento y con esa información fue a través de aquél que solicitó el servicio de acarreo; en la declaración de parte la demandada afirmó que pese a firmar la carta de traspaso, no se hizo el registro ante el tránsito porque el carro se pagaba a cuotas, pero que sí entregó la posesión material desde el primer momento, lo que se refuerza con el testimonio de Gildardo de Jesús Villegas, quien indicó que en calidad de comerciante en la compra y venta de vehículos, sabe que el traspaso no se registra en el tránsito cuando se pacta el pago a cuotas, como aquí lo hicieron los involucrados, según consta en el formulario de traspaso; si bien en principio resultó extraño que el accidente lo causó el cónyuge de la señora María Nelly sin que ella tuviese relación alguna con el vehículo, por parte del citado testigo se señaló que el señor Guillermo seguía conduciendo el automotor para los acarreos pero a nombre y por cuenta de Carlos Hernán García, no se

puede dejar de lado que pese a que el rodante está involucrado en un accidente de tránsito, el señor Carlos Hernán aceptó continuar con el traspaso del mismo, aun conociendo las consecuencias legales de ser su propietario y estar el vehículo inmerso en una investigación penal para esa época, a lo que se suma el silencio y falta de participación de aquél en el presente proceso; no sobra señalar que las pruebas practicadas en el proceso penal a que refiere la parte demandada en sus alegatos, no se pueden valorar como pruebas individualmente aportadas; es claro que la parte actora solicitó copia del proceso penal pero no lo hizo bajo la figura de la prueba trasladada para que dichas pruebas, en especial la de los guardas de seguridad de la urbanización, puedan ser valoradas con la misma ponderación de la que se les diera en el proceso penal, sino como prueba de la existencia del hecho como fue estimada; sobre este punto la doctrina ha señalado que le corresponde al demandado demostrar que se ha desprendido de la guarda material y que en efecto no la tenía; es decir, que al momento de los hechos no tenía el control y manejo directo sobre la cosa y, menos aún, que pudo ejercer la actividad peligrosa o tuvo control sobre la misma; en el caso de la ausencia de la guarda material del demandado, se debe demostrar que la misma fue y es totalmente ajena a su custodia y cuidado; está demostrado que la señora María Nelly no conducía el vehículo para el momento del accidente sino que lo era el señor Guillermo Jiménez Ocampo, quien fue vinculado al proceso penal y aceptó su responsabilidad por el delito de homicidio culposo; de la misma manera, se considera que con las pruebas testimoniales y documentales allegadas no es posible endilgar responsabilidad a la señora María Nelly Ramírez

Ossa, porque la guarda material del vehículo la tenía el señor Carlos Hernán García Morales, quien era el responsable sobre la actividad que con el automotor se desarrollaba; dada esta conclusión es preciso señalar que en razón de la denuncia del pleito el denunciado Carlos Hernán García Morales, se encuentra en posición de garante frente a la denunciante María Nelly Ramírez Ossa y, por ello, está obligado a responder por las condenas que se profieran contra la denunciante en el pleito.

Acorde con lo anterior, la parte actora acreditó los elementos de la responsabilidad civil extracontractual y al no estar llamadas a prosperar las excepciones de mérito propuestas, habrá de declararse la responsabilidad civil y extracontractual a los demandados Guillermo de Jesús Jiménez Ocampo y María Nelly Ramírez Ossa, por el accidente de tránsito ocurrido el 08 de septiembre de 2015, donde perdió la vida la joven Sor María Pino Salazar; en cuanto a los perjuicios solicitados se debe señalar que si bien los perjuicios morales están acreditados, ello no aconteció con los perjuicios patrimoniales que se solicitan a favor de la señora Gabriela Pino Salazar, porque si bien ésta residía en la misma casa con la fallecida, no resultó clara su dependencia económica teniendo en cuenta que la víctima tenía un hijo menor de edad por quien debía responder y a quien le debía alimentos; contrario a ello, se pudo constatar con los interrogatorios que Sor María al no tener un ingreso estable que le permitiera cubrir los gastos de su hijo, vivía en la casa de su señora madre y sus hermanos, quienes suministraban lo que a ella le faltaba; si bien es claro, que cuando una persona cumple la mayoría de edad, tiene la presunción de devengar un

salario mínimo, no se presume que de dicho ingreso aporte un porcentaje para la manutención de sus padres; contrario a ello, si ocurre con relación a los hijos; por ello, la dependencia económica de la señora Gabriela Pino Salazar no se demostró y, por tanto, solo habrá lugar al reconocimiento de los perjuicios morales, que fueron acreditados como viene de indicarse; por ello, se condenará a los demandados al pago de los perjuicios extrapatrimoniales pero no por el valor solicitado, porque con relación a los hermanos de la víctima excede los límites planteados por la jurisprudencia; por lo tanto, para la madre de la víctima Gabriela Jiménez Ocampo se reconocerá un valor equivalente a 70 SMLMV y de 40 SMLMV para cada uno de sus hermanos Marisabel Tobón Pino y Wilmar Andrés Pino Salazar, para el momento del accidente; el denunciado Carlos Hernán García Morales debe reembolsar los dineros que la denunciante del pleito cancele a los demandantes; en cuanto al juramento estimatorio y la objeción que presentó la codemandada María Nelly Ramírez Ossa, no habrá lugar a imponer ningún tipo de sanción porque los demandantes están amparados por pobres; se condenará en costas a los demandados a favor de los demandantes y como agencias en derecho se fijará \$7.500.000,00.

**Apelación:** Lo interpuso la codemandada María Nelly Ramírez Ossa y dentro los tres (3) días siguientes a la audiencia de instrucción y juzgamiento, como reparos concretos indicó: Se debió acoger la excepción de mérito denominada "*ausencia de guarda material y jurídica del bien con el cual se ocasionó los perjuicios*" porque como lo señaló la a quo, la codemandada acreditó con la prueba testimonial y documental que mucho antes de la ocurrencia del accidente

se había desprendido de la guarda material y jurídica del automotor con el que se ocasionó el daño; se debía reconocer que no estaba obligada a responder por los perjuicios padecidos por los demandantes; también se debió acoger la excepción de concurrencia de culpas y realizar la respectiva compensación, puesto que de la prueba documental trasladada se desprende que la víctima transitaba sobre la vía pública, aportando con su actuar imprudente al daño que sufrió; el amparo de pobreza no exonera de la sanción por la tasación excesiva de perjuicios (folio 745 cuaderno principal).

No obstante que la recurrente no describió el traslado concedido; advierte la Sala, que al interponer el recurso de apelación y dentro de los tres días siguientes al presentar la censura, lo sustentó, como viene de sintetizarse y como la sentencia se proferirá por escrito, será tenida en cuenta.

Sobre el particular, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, se pronunció en sentencia de tutela STC5497-2021, Rdo. 11001-02-03-000-2021-01132-00 del 18 de mayo de 2021. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo, precisando:

*"4.2. Así las cosas, la Sala ha considerado que en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, la exposición de los motivos de la alzada frente a una sentencia judicial, no exime al recurrente de la carga de sustentar oralmente sus inconformidades ante el superior. Y es que, ello se justifica porque el sistema procesal contemplado en aquella obra propende por el respeto y la garantía del principio de oralidad,*

*así como de otros valores importantes como la celeridad y la concentración de los actos judiciales.*

*"4.3. Sin embargo, la difícil situación por la que atraviesa actualmente la sociedad a causa de la pandemia generada por el covid-19, obligó a que el Estado se adaptara a los retos impuestos por la propagación de éste. Así por ejemplo, en el campo jurídico, se promulgaron varias normas de carácter transitorio sobre la ritualidad de los procesos judiciales, de esta manera, respecto de la sustentación del recurso de apelación, el artículo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020, dispuso que:*

*"«El recurso de apelación contra sentencia en los procesos civiles y de familia, se tramitará así:*

*"Sin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, dentro del término de ejecutoria del auto que admite la apelación, las partes podrán pedir la práctica de pruebas y el juez las decretará únicamente en los casos señalado en el artículo 327 del Código General del Proceso. El juez se pronunciará dentro de los cinco (5) días siguientes.*

*"Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes. De la sustentación se correrá traslado a la parte contraria por el término de cinco (5) días. Vencido el término de traslado se proferirá sentencia escrita que se notificará por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarará desierto».*



*"4.4. De este modo, cierto es que el cambio de la realidad que trajo la emergencia sanitaria conllevó a que se abandonara, momentáneamente, la necesidad de sustentar oralmente el recurso de apelación, para ser suplida por el sistema de antaño, esto es, que las inconformidades de los apelantes contra las providencias judiciales se formularan por escrito y así proteger bienes tan trascendentales como la vida y la salud de los usuarios y funcionarios de la justicia.*

*"No obstante, aquí es pertinente hacer claridad en algo, y es que la exigencia de exponer de manera oral los reproches frente a los pronunciamientos judiciales no ha desaparecido, pues, se reitera, las medidas tomadas por el Gobierno Nacional son temporales debido a la emergencia sanitaria, además, por motivos de salubridad pública, la oralidad actualmente no es indispensable, por eso es que, por ahora los recurrentes deben presentar sus disensos de manera escrita.*

*"4.5. Bajo esa perspectiva, en vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020, si desde el umbral de la interposición de la alzada el recurrente expone de manera completa los reparos por los que está en desacuerdo con la providencia judicial, no hay motivo para que el superior exija la sustentación de la impugnación, de lo contrario, si los reproches realizados apenas son enunciativos, desde luego, el juez deberá ordenar el agotamiento de esa formalidad, conforme lo previsto en la normatividad señalada..."*

Por su parte, el extremo activo – no recurrente – adujo que la excepción de ausencia de guarda material y jurídica del vehículo con el que se ocasionaron los perjuicios, va de la mano con la figura de denuncia del pleito, hoy llamamiento en garantía, no siendo posible exonerar de responsabilidad a la parte demandada y condenar al denunciado en el pleito; no se entiende el porqué del recurso de alzada cuando la decisión es favorable a la recurrente, quien en caso de pagar alguna suma de dinero se puede subrogar con el denunciado del pleito, quien en últimas es el llamado a responder; además, en el plenario está plenamente demostrado que el automotor era de propiedad de la demandada María Nelly Ramírez Ossa, hasta el 07 de diciembre de 2015, como se desprende del historial del rodante y de los elementos de convicción que en extenso pasa a enlistar; a lo que agrega, lo señalado por la jurisprudencia frente al “*guardián de la actividad*”; así mismo indica que no es posible la declaratoria de concurrencia de culpas porque quien desarrollaba la actividad peligrosa lo era el conductor del automotor Guillermo de Jesús Jiménez Ocampo, cuyo actuar fue determinante en la producción del accidente donde perdió la vida la Joven Sor María Pino Salazar, toda vez, que aquél conducía en estado de embriaguez, siendo esta la causa eficiente, idónea y decisiva en la ocurrencia de los hechos, no siendo procedente la exoneración de responsabilidad; amén, que la injerencia de la víctima en el accidente fue nula o de mínima relevancia; además, el conductor huyó del lugar sin socorrer a la víctima, aceptó la responsabilidad penal por homicidio culposo y fue sancionado contravencionalmente; no se presenta una excesiva tasación de perjuicios que dé lugar a sanción alguna; amén, que se renunció a los perjuicios materiales a favor del

menor porque fueron indemnizados en el proceso penal; el juramento estimatorio no aplica para la cuantificación de los perjuicios extrapatrimoniales y los demandantes están amparados por pobres, con los beneficios que ello apareja. Por estas razones, solicita se confirme íntegramente la decisión de primer grado.

### **III. CONSIDERACIONES**

***Problemas jurídicos:*** El recurso de apelación de cara a la sentencia de primer grado, plantea los siguientes problemas jurídicos que la Sala debe resolver: (i) ¿la excepción denominada “*ausencia de guarda material y jurídica del bien con el cual se ocasionó los perjuicios*”, está llamada a prosperar?; (ii) ¿se presentó una concurrencia de culpas por el actuar imprudente de la víctima? y, (iii) ¿hay lugar a imponer las sanciones previstas en el Art. 206 del CGP, no obstante que los pretensores están amparados por pobres?

Por orden metodológico, se examina en primer lugar, si la excepción de “*ausencia de guarda material y jurídica del bien con el cual se ocasionó los perjuicios*” está llamada a prosperar y, si fuere el caso, se pasará al estudio de las demás inconformidades planteadas por la recurrente.

***Ausencia de guarda material y jurídica:*** Afirma la recurrente María Nelly Ramírez Ossa, que como lo señaló la Señora Juez a quo, acreditó que para la fecha del accidente ya se había desprendido de la guarda material y jurídica del vehículo automotor que ocasionó el daño y no está obligada a responder por los perjuicios demandados.

Al respecto, tenemos que si bien la señora María Nelly Ramírez Ossa al proponer el reseñado medio de defensa arguye que por la venta del rodante que hizo al señor Carlos Hernán García Morales, el 14 de mayo de 2014, no estaba llamada a responder por los perjuicios ocasionados a terceras personas por el accidente de tránsito; confusamente, denunció el pleito a éste para que le indemnice los perjuicios que le ocasionó por no haber realizado el traspaso del vehículo.

Ahora, como prueba de la venta y entrega material del vehículo a motor de placas EVR 904, que afirma la codemandada María Nelly Ramírez Ossa, realizó desde el 14 de mayo de 2014, al señor Carlos Hernán García Morales, trajo como anexo de la respuesta a la demanda, el contrato de compraventa suscrito el 14 de mayo de 2014, así como el formulario de solicitud de trámites del registro nacional automotor y del poder otorgado por la vendedora al comprador para realizar los trámites de traspaso, suscritos el 16 de junio de 2015 (folios 109 y ss., cuaderno principal); al efecto, advierte la Sala que tratándose de un documento privado, como fecha cierta del mismo, frente a terceros se tiene la del momento en que haya ocurrido un hecho que le permita al juez tener certeza sobre su existencia, como su inscripción en un registro público, su aportación a un proceso o el fallecimiento de alguno de los que lo han firmado, como lo ordena el art. 253 del C. General del Proceso; bajo estas circunstancias, como fecha de los citados documentos se debe tener en cuenta bien la del registro del traspaso del automotor que tal como consta en el historial del vehículo tuvo lugar el 07 de diciembre de 2015 (folio 110 cuaderno

principal) o la fecha de aportación de dichos documentos al proceso, esto es, 15 de febrero de 2016, cuando fue presentada la respuesta de la demanda en la Oficina de Apoyo Judicial (folio 108 cuaderno principal); fechas posteriores a la ocurrencia del accidente que tuvo lugar el 08 de septiembre de 2015; al contrario de lo señalado por la recurrente, tales documentos no dan cuenta que la codemandada María Nelly Ramírez Ossa, para la fecha del accidente se había desprendido de la guarda material y jurídica de rodante.

De otra parte, la declaración del testigo Wilson Steven Beltrán Triana (minuto 9:21 y ss., archivo CP-0730134640487, DVD folio 743 cuaderno principal); no resulta contundente en cuanto a la guarda material y jurídica que el señor Carlos Hernán García Morales, ostentaba para la fecha del accidente sobre el rodante, toda vez que no da cuenta de los actos que como propietario y/o poseedor desplegó, tales como el pago del impuesto de rodamiento, semaforización, adquisición de SOAT, mantenimiento, reparación y compra de repuestos para el automotor, pues fue la misma codemandada María Nelly Ramírez Ossa quien le dijo que había vendido el vehículo pero éste no presenció la negociación ni sabe la fecha ni los pormenores de la misma; además, el hecho de que hubiera contratado con el señor Carlos Hernán García Morales, el servicio de transporte en algunas ocasiones, per se, no da cuenta de la posesión material y jurídica que éste ostentara sobre el rodante, pues dicha actividad no está reservada única y exclusivamente para quien funge como poseedor o propietario, ya que la misma puede adelantarse, entre otros, por el mero tenedor, el administrador o el mandatario, o incluso por el conductor como en la práctica suele ocurrir;

igualmente, el testimonio del señor Gildardo de Jesús Villegas Ramírez (minuto 28:05 y ss., archivo CP-0730134640487, DVD folio 743 cuaderno principal), a pesar de señalar que el señor Carlos Hernán García Morales, quien es socio suyo en la compraventa de carros y motos, adquirió el vehículo de manos de la señora María Nelly, no conoció los pormenores de la negociación porque no estuvo presente, como tampoco dio cuenta de los actos que como propietario y/o poseedor ha desplegado el señor García Morales, tales como el pago del impuesto de rodamiento, semaforización, adquisición del SOAT, mantenimiento, reparación y compra de repuestos para el automotor, pues simplemente se limitó a indicar que ahí en el negocio todos disponían del vehículo; además, sobre el traspaso del automotor a pesar de indicar que acorde con su experiencia, se realiza cuando se pague la totalidad del precio, no hizo ninguna manifestación en cuanto al traspaso del vehículo objeto del proceso.

De lo anterior se colige que al proceso no se allegó prueba idónea y contundente, que de cuenta que la señora María Nelly Ramírez Ossa, se desprendió de la guarda material y jurídica del vehículo automotor del que figura como propietaria con el que se ocasionó el accidente.

***Concurrencia de culpas:*** Afirma la recurrente que dado el aporte culposo de la occisa en la producción fatal del accidente, tal como lo indicó al proponer la excepción, se debe considerar que ésta contribuyó en la generación del daño y proceder a realizar la respectiva compensación de culpas; así como en el medio exceptivo denominado culpa exclusiva de la víctima; afirma que conforme el croquis del accidente, el

lugar donde eventualmente estaba ubicada la peatona carece de andén, no pudiendo ser cierto que la víctima estaba en la acera, siendo necesario para la producción del accidente que ésta estuviera sobre la vía, lo que constituye una evidente imprudencia dado el horario nocturno, la escasa iluminación y presencia de vegetación que obstaculiza la visibilidad (folio 106 cuaderno principal).

Al respecto observa la Sala, que estos argumentos están huérfanos de prueba y, por tanto, no aparece desvirtuada la presunción de culpa en favor de la víctima y en contra de los demandados, como se pasa a explicar: Si bien la Inspección de Policía adscrita a la Secretaría de Movilidad del Municipio de Medellín, mediante Resolución No. 2016271330, del 04 de marzo de 2016, no imputó responsabilidad contravencional de tránsito en contra del conductor del automotor, señor Guillermo de Jesús Jiménez Ocampo (folio 414 y ss., cuaderno principal); la Fiscalía 106 Seccional Unidad de Vida de la ciudad de Medellín, que adelantó la investigación penal, en el escrito de acusación que presentó es contundente en indicar: *"De los elementos materiales de prueba recolectados, esto es, la noticia criminal, entrevistas de los testigos, informes periciales, indican que le es imputable al señor GUILLERMO DE JESÚS JIMÉNEZ OCAMPO la conducta punible de homicidio culposo, toda vez que el resultado típico fue producto de la infracción al deber de cuidado, que consistió en el incremento del riesgo permitido, con pluralidad de infracciones tales como: artículo 55 ... artículo 74... artículo 106, modificado por la ley 239 de 2008, artículo 1..."*

*"Por lo anterior, con fundamento en los elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, se puede afirmar, con probabilidad de verdad, que existió la conducta punible de homicidio culposo Agravado, consagrado en el Código Penal en los **artículos 109, 110, adicionado por la ley 1696 de 2013, artículo segundo...**"*  
(folio 480 cuaderno principal).

En el denominado *"Informe Investigador de Laboratorio –FPJ-13"* realizado por el servidor de Policía Judicial del grupo de criminalística, como resultados consignó: *"A partir de la localización de las lesiones de la víctima descritas en el informe pericial de necropsia N°. 2015010105001001631, la ubicación de los fragmentos de vidrio y lago hemático en el bosquejo topográfico que obra a folio 41 así como los daños mostrados en las fotografías de la camioneta podemos afirmar que momentos antes de la colisión la camioneta se desplazaba de Norte a Sur por el carril izquierdo de la carrera 70 en tanto que la peatón terminaba el cruce de dicha vía de Occidente a oriente.*

*"Teniendo en cuenta las fotografías que muestran los daños de la camioneta de placa EVR 904, imágenes 20150908\_214936 y 20150908\_214948, podemos indicar que la camioneta golpeó con el extremo delantero izquierdo del bumper la pierna izquierda de la peatón, produciendo a continuación los movimientos descritos en la **Figura 1** mientras la camioneta continuaba su marcha.*

*"Toda vez que el conductor de la camioneta huyo del lugar de los hechos y tampoco se ubica la posición final de la víctima*



*tenemos que utilizar las tablas comparativas extraídas de los estudios del Doctor Arthur Damask que se ilustra en la **Figura 2**, donde se relaciona la trayectoria de la cabeza de un peatón arrollado por un automotor grande y pequeño con su velocidad {1}. De esta manera de acuerdo con el alcance máximo sobre el vidrio panorámico de la cabeza del peatón mostrada en la **Imagen 20150908\_214936** podemos inferir que la camioneta al momento de golpear la señora con el extremo delantero izquierdo del bomper se desplazaba a una velocidad superior a los 65,0 k p h (kilómetros por hora)" {folios 683 a 690 cuaderno principal).*

Sumado a lo anterior, el conductor del vehículo aceptó los cargos que le fueron imputados por el delito de homicidio culposo; con lo cual, admitió ser el único responsable de los hechos que produjeron el accidente, donde perdió la vida la joven Sor María Pino Salazar; al respecto, en el acta de audiencias del 02 de marzo de 2016, llevada a cabo por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, en el acápite denominado "observaciones" se consignó: "Se impartió aprobación al preacuerdo suscrito por el Delegado de la Fiscalía, la Defensa y el Representante de Víctimas, consistente en la aceptación de los cargos del imputado y a cambio de ello la Fiscalía elimina de todas las agravantes quedando el delito en un HOMICIDIO CULPOSO, con una pena de 32 a 108 meses de prisión y multa de 26.66 smlmv, y la privación del derecho a conducir vehículos automotores por 48 a 90 meses. Decisión que quedó ejecutoriada en estrados" (folio 495 cuaderno principal). Es más, en la comunicación 20440-01-02-80 del 05 de octubre de 2017, remitida por la Fiscalía 106 Seccional – Subunidad

de Delitos Culposos, indicó “... *que en el proceso ya se surtió sentencia con fallo condenatorio, emitida por el Juzgado 7 Penal del Circuito de Medellín, el día 22 de abril de 2016...*” (folio 390 cuaderno principal).

En efecto, se pone de presente que no solo está acreditado el hecho dañoso, sino además la culpabilidad del codemandado Guillermo de Jesús Jiménez Ocampo, porque así lo aceptó en el acuerdo al que llegó con la Fiscalía y aunque esta circunstancia por sí sola no es suficiente para descartar la participación de la víctima en la causación de su propio daño; lo cierto, es que tiene que estar probada a cabalidad en el plenario, sin que al efecto se advierta que la víctima tuvo participación en la causación del daño; pues no se aportó elementos de convicción para confirmar esta aseveración como viene de examinarse; todo lo cual permite colegir sin lugar a dudas, que las excepciones de culpa exclusiva de la víctima y de concurrencia de culpas no están llamada a prosperar.

***Sanción por el juramento estimatorio:*** En primer lugar se advierte, que la imposición de la sanción a que se contrae el art. 206 del C. General del Proceso, es a favor del Consejo Superior de la Judicatura; la que ni perjudica ni le reporta beneficio a la codemandada; pues a la postre a los únicos que reporta beneficio o perjuicio una decisión en tal sentido; es al demandante y a su acreedor, el Consejo Superior de la Judicatura (beneficiario de la sanción); de donde se sigue que si a la codemandada no le reporta beneficio ni la perjudica, carece de interés para recurrir la sentencia en tal sentido, lo que torna inviable el recurso sobre este tópico.

**Conclusión:** Se confirmará la sentencia de primer grado y se condenará en costas a la codemandada María Nelly Ramírez Ossa, a favor de la parte demandante. Como agencias en derecho causadas en segunda instancia se fijará por el Magistrado ponente la suma de DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000,00), que equivale a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (Acuerdo PSAA16-10554, del 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura), que se liquidarán conjuntamente con las de primer grado.

#### **IV. RESOLUCIÓN**

A mérito de lo expuesto, la **SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

#### **F A L L A:**

**1.** Por lo dicho en la parte motiva se confirma la sentencia de fecha y procedencia indicadas.

**2.** Se condena en costas a la codemandada María Nelly Ramírez Ossa, a favor de la parte demandante. Como agencias en derecho causadas en segunda instancia se fija por el Magistrado ponente la suma de DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000,00), que equivale a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (Acuerdo PSAA16-10554, del 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo

Superior de la Judicatura), que se liquidarán conjuntamente con las de primer grado.

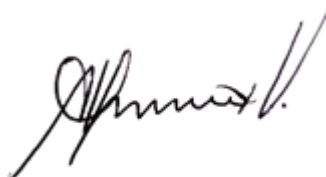
**3.** Se ordena devolver el expediente al Juzgado de origen.

**CÓPIESE, NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE:**

**Los Magistrados**



**LUIS ENRIQUE GIL MARÍN**



**MARTHA CECILIA LEMA VILLADA**



**RICARDO LEÓN CARVAJAL MARTÍNEZ**